

AMPARO.

Juicio promovido en el Juzgado 2º de Distrito de México por el C. José Mariano Lara, contra los procedimientos de la 3ª recaudación de contribuciones, por creer que violan las garantías que otorgan los artículos 14, 27 y 50 de la Constitución federal.

PRELIMINARIO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor dice: que D. José Mariano Lara ha interpuesto el recurso de amparo, por considerar violadas en su persona las garantías individuales que otorga el art. 14 de la Constitución, así como las consignadas en los artículos 27 y 50 de la misma, con los procedimientos de la oficina de contribuciones que le ha secuestrado las rentas de su casa núm. 4 de la calle de la Palma, ateniéndose á una manifestación hecha por D. José Iver Limantour, en la que le fija mayor cantidad de renta de la que le asignó la junta calificadora, conforme á la ley de 4 de Febrero de 1861, por acuerdo de la misma oficina de contribuciones para el cobro de las que corresponden á esa casa.

En el informe que se ha rendido, se hace mención de los diversos acuerdos que se han dictado sobre este negocio, con motivo de que tanto Lara por su parte como Limantour por la suya han manifestado á la oficina y al Ministerio de hacienda las razones en que apoyan sus derechos sobre la propiedad de la finca, que se disputan ante el poder judicial, de manera que la propiedad de la finca ha debido considerarse cuestionable mientras que el litigio entre ambos no se termine definitivamente; y por lo mismo, estando pendiente las determinaciones de que se queja Lara, invaden las atribuciones del poder judicial atacando al mismo tiempo la garantía consignada en el art. 14 de la Constitución por la que se solicita

el amparo, cuando para la graduación de impuesto se ha fijado la base designada por la junta establecida por la ley referente á la materia, que es la de 4 de Febrero de 1861.

Por el certificado expedido de la sentencia pronunciada por el Juzgado 1º de lo civil que se acompaña al recurso del quejoso se demuestra, que la cuestión sobre propiedad que se disputan Lara y Limantour, está resuelta en favor del primero; y como en el informe rendido por la oficina se dice, que el apoderado ó representante del 2º que hizo la manifestación exhibió copia de una sentencia para acreditar que era dueño de la finca, será necesario que en el término de prueba se exhiban esos documentos que obran en el expediente, formado por la oficina; pero constando que esta había hecho ya la regulación con arreglo á la certificación de la junta establecida por la ley, al aumentarla en vista de la manifestación de un tercero cuyos derechos se disputan ante el poder judicial, que es el competente, se han violado las garantías por las que se solicita el amparo.

Por estas razones el que suscribe cree, que es de otorgarse al quejoso, reponiéndose en la posesión de las rentas que con exceso le hallan secuestrado sobre la base establecida por la junta calificadora, pues tal debe ser el objeto del amparo contra las determinaciones que violan las garantías constitucionales.

México, Julio veinte de mil ochocientos setenta y uno.—Francisco G. Molezuma.

Sentencia del Juzgado de Distrito

México, Agosto veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo interpuesto por el C. José Mariano Lara á virtud de reputar violadas en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 14, 27 y 50 de la Constitución, con

los procedimientos de la oficina ó direccion de contribuciones, dictados para el embargo de las rentas de la casa núm. 4 de la calle de la Palma; visto el informe que como autoridad responsable rindió el C. director de la expresada oficina; lo pedido por el Ministerio fiscal; y visto en fin lo que debía; atendiéndose á que la violacion de garantías se hace consistir por la parte quejosa en que, hallándose en la vía judicial la cuestion sobre pertenencia de las rentas de la citada casa núm. 4, al proceder la oficina de contribuciones á su embargo guiándose para ello por la manifestacion falsa que hizo D. José L. Limantour y sin atender la oposicion del quejoso que alegaba las circunstancias indicadas; con tales procedimientos llevados á efecto por la respectiva recaudacion, se han violado en la persona del quejoso las garantías que otorgan los citados artículos 14, 27 y 50; y

Considerando:

Primero; que en cuanto al art. 14 cuya garantía se dice violada, los procedimientos de la oficina para asegurar el pago de adeudo de contribuciones no pueden reputarse una decision judicial y menos como dictada ó pronunciada por tribunal *“que no ha sido precisamente establecido por la ley;”* puesto que la oficina recaudadora tan solamente aseguró los intereses del fisco usando para ello de las facultades propias que le otorgan las leyes (20 de Enero de 1837 y reglamento respectivo,) sin que esto impida el ejercicio de los derechos que á los interesados competen, ya para exigir responsabilidad á dicha oficina si sus determinaciones no han sido arregladas á la ley, ó ya para asegurar por la vía y en la forma legal su propiedad ó intereses que por aquellos procedimientos pudieran reputarse atacados, y sin que tampoco pueda decirse que con los expresados procedimientos la oficina haya prejuzgado ó decidido en cuanto á la cuestion judicial ó ejecutado acto que implique la violacion del art. 14 de la Constitucion.

Segundo; que en cuanto al art. 27 igualmente no puede decirse violado, porque cuando se ejercita una facultad ó derecho otorgado por la ley como lo ha verificado la oficina de contribuciones, sin embargo de que no sea justa y debidamente aplicada esa ley al caso dado, no puede reputarse expropiacion tal acto, y si bien la irregularidad ó inobservancia de la ley daría accion para la responsabilidad ó para usar en otra forma de sus derechos ó indebidamente perjudicado, no debe acontecer lo mismo en cuanto al otorgamiento de amparo, porque para ello es indispensable que por la ley ó por el acto de la autoridad se verifique violacion de las garantías individuales que invoque el quejoso: Considerando.

Tercero; con respecto al art. 50 que tambien se designa por el quejoso como violado: que aun en el supuesto de que las determinaciones de la oficina recaudadora lo infringiesen como se pretende, sin embargo no seria violacion de garantías para el efecto de otorgar amparo, porque dicho art. 50 de la Constitucion tan solo establece la division de poderes en la Nacion, y no la concesion de garantía individual alguna, pudiendo ser por consiguiente la inobservancia de ese art. infraccion constitucional, mas no violacion de garantías individuales:

Cuarto; que si la oficina no ha obsequiado las determinaciones dictadas al caso por el ministerio de hacienda, ni en sus procedimiento se ha sujetado estrictamente á las leyes referentes á la facultad económico coactiva ú otras que determinen las atribuciones de la oficina para la recaudacion, será sí responsable de tales actos y el interesado ó quejoso tendrá su derecho á salvo para entablar ese ú otros recursos, mas no por la vía de amparo, puesto que para ello es indispensable (art. 101 fraccion 1ª de la Constitucion,) *“se efectúe por ley ó acto de alguna autoridad la violacion de garantías individuales”* y esto no se verifica por el solo hecho de no acatar ó infringir las leyes sean de la naturaleza que fueren, si la in-

fraccion ó inobservancia no se contrae precisamente á alguna de las garantías que como individuales consigna la Constitucion federal en sus artículos del 1º al 38. Por tales razones pues, se declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. José Mariano Lara contra los procedimientos dictados por la oficina recaudadora para el cobro de contribuciones de la casa núm. 4 de la calle de la Palma, por no haberse efectuado violacion de las garantías que invoca el quejoso. Remítase copia al Diario Oficial y Semanario Judicial, y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 13 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869. Lo decretó y firmó el C. juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé.—*José M. Canalizo*, =*Inocencio Santaella*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 2º de Distrito de esta capital, por el C. José Mariano Lara, contra los procedimientos de la 2ª recaudacion de contribuciones, en virtud de los cuales le ha secuestrado las rentas de la casa núm. 4 de la calle de la Palma, atendíendose á una manifestacion hecha por D. José I. Limantour en la que se fija mayor cantidad de renta de la que le asignó la junta calificadora, conforme á la ley de 4 de Febrero de 1861, por acuerdo de la misma oficina de contribuciones para el cobro de las que corresponden á dicha casa, alegando que dichos procedimientos violan en su persona las garantías que otorgan los artículos 14, 27 y 50 de la Constitucion general de la república. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que el peticionario ha es-

tado pagando á la oficina de contribuciones la cantidad que le fué asignada por la junta calificadora establecida por la ley de 4 de Febrero de 1861: que D. José I. Limantour señaló á Lara, como inquilino de la mencionada casa núm. 4 de la calle de la Palma, estando pendiente un juicio sobre pago de rentas, una mayor, que ha servido de base á la oficina recaudadora para el cobro de los impuestos.

Considerando: que el Ministerio de hacienda, al declarar por su acuerdo de 9 de Marzo de este año, que la oficina debía cobrar las contribuciones, sujetándose á la manifestacion hecha por Limantour, ha prejudgado una cuestion que está sometida á la decision de los tribunales.

Considerando finalmente: que la 2ª recaudacion al tratar de hacer efectivo dicho acuerdo en lo excedente de la cuota señalada al peticionario por la junta calificadora, ha violado las garantías otorgadas por el art. 14 de la Constitucion general de la república; con tales fundamentos, y dejando á la hacienda pública sus derechos á salvo para hacerlos valer en la vía y forma prescrita por las leyes, el que cree asistirle en virtud de la manifestacion hecha por Limantour, luego que la cuestion haya sido resuelta por la autoridad judicial, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juez 2º de Distrito de la capital que negó el amparo al promovente, y se declara: que la justicia de la Union ampara y protege al C. José Mariano Lara, contra el mandamiento de ejecucion librado por la 2ª recaudacion de contribuciones, en virtud del cual se le cobra un excedente sobre la cuota señalada al quejoso por la junta calificadora, á la que se ha sujetado para el pago de los impuestos.

Devuélvanse sus actuaciones al juez 2º de Distrito de esta capital con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría absoluta de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por el C. Estéban Salaices, contra el presidente de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital que ha hecho efectivo un acuerdo del ayuntamiento, en virtud del cual se privó al quejoso de un terreno de su propiedad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que desde el 17 de Junio próximo pasado se mandó al presidente municipal de San Juan del Mezquital, la copia que la ley previene, á fin de que dentro de tercero día de recibida, rindiera el informe justificado sobre lo principal de la queja del C. Estéban Salaices, á que se refiere el art. 99 de la ley orgánica de amparo; y no obstante haber trascurrido con exceso dicho término, el presidente de San Juan que en su informe de 6 de Junio trató de demostrar que no era de suspenderse la providencia reclamada, sosteniendo que debía ejecutarse por no haber en ella violación de garantías individuales y ser solo el cumplimiento de una ley general para evitar abusos y desórdenes, no

ha rendido el informe expresado; en cuya virtud el suscrito con la vista sola del ocursó del solicitante, de los documentos anexos y del precitado informe del funcionario que trataba de ejecutar la providencia reclamada, útil para llenar su deber en el caso, porque en él están de antemano asentados en corroboración los hechos que fundan la queja que motiva este juicio, va á exponer los fundamentos que en su opinion, son de tenerse presentes para otorgar el amparo solicitado. Son los siguientes:

Obra de fojas 7 á 29 el título de la merced de propiedad otorgado por el juez privativo de tierras, D. Francisco Galindo y Quiñones en 20 de Agosto de 1768 del sitio de ganado mayor de Jalpa, á lindes con los cuatro sitios menos siete caballerías fundo del pueblo de San Juan del Mezquital en favor de los naturales ó indígenas de dicho pueblo, para que lo gozaran por sí y por sus sucesores ó los que sus derechos representaran.

De tal título resulta: que aunque el sitio de Jalpa fué adjudicado en comun, lo fué solo á los naturales y no al pueblo de San Juan que ya tenía su fundo propio, bajo el concepto de no ser dichos naturales una comunidad ó corporación en cuyas manos estuvieran muertos esos bienes, sino á una reunión ó compañía de personas, que desde entonces á la fecha, han gozado por sí ó indivisamente del terreno en las partes que les han correspondido como sucesores ó adquirentes de los primeros concesionarios sin que los hayan tenido estancados, ni amortizados, sino en circulación constante, comprándose y vendiéndose, y transfiriéndose los derechos sobre ellos, por los demás títulos legales.

Por lo mismo, no puede decirse que estén comprendidos en las leyes que decretaron la desamortización de los bienes estancados; pues que ni desde su origen, ni con posterioridad fueron concegiles, ni fundo del pueblo que tenía los cuatro sitios menos siete caballerías como patrimonio del